El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

**TEMAS: SEGURIDAD SOCIAL / CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL / PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD / EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA NO LUCE EFICAZ / FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN / TRÁMITE REGULADO.**

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares…

… considera esta instancia que resulta desproporcionado obligar al accionante a acudir a un proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social para reclamar simplemente su derecho a la práctica y notificación del dictamen de primera oportunidad a cargo del fondo de pensiones sin dilaciones de ninguna clase…

… en casos similares al presente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido (i) la importancia del derecho a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral como un medio para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital…; y que (ii) si bien existe un mecanismo de defensa ordinario a cargo de la jurisdicción laboral y de la seguridad social…, al cual podría acudirse para controvertir la demora o dilación en la práctica de la calificación, el mismo luce ineficaz al no ser lo suficientemente expedito frente a situaciones particulares de ciudadanos que, al no contar con otros medios económicos, estar discapacitados…, ser sujetos de especial protección por su extrema vulnerabilidad o ser víctimas del conflicto armado…demandan una protección inmediata.

En suma, considera la Colegiatura que, en aplicación de esos precedentes, la tutela resulta procedente pues se hace necesario adoptar las medidas urgentes para que se defina la situación médico laboral del actor, al menos en cuanto se refiere a la calificación de invalidez, lo que permitirá determinar si tiene derecho o no de acceder a la pensión de invalidez.

… la determinación de la pérdida de capacidad laboral tiene un trámite regulado, que involucra la acción coordinada tanto del afiliado como de diferentes instituciones que integran ese sistema (Sentencia T-044 de 2018). Así, quien actúa como calificador (para el caso Colpensiones) tiene la posibilidad de solicitar en forma directa a la EPS o los médicos tratantes, así como también puede hacer uso de sus facultades para surtir las gestiones del caso en aras de obtener las valoraciones o exámenes clínicos necesarios para determinar integralmente el estado médico laboral del afiliado.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA**

**SALA CIVIL – FAMILIA**

Magistrado Ponente: Carlos Mauricio García Barajas

Pereira, dieciséis (16) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Acta N° 200 de 16-05-2022

Sentencia: ST2-0131-2022

**ASUNTO**

Procede la Sala a resolver sobre la impugnación formulada por la parte accionada contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 15 de febrero pasado, dentro de la acción de tutela que promovió el señor Jairo Cifuentes Valencia en contra de Colpensiones, trámite al que fueron vinculados la Directora de Medicina Laboral, la Directora de Prestaciones Económicas, la Directora de Acciones Constitucionales, el Director de Procesos Judiciales, el Gerente de Determinación de Derechos, el Gerente de Defensa Judicial, el Vicepresidente de Operaciones del Régimen de Prima Media y la Subdirectora de Determinación de Derechos de esa misma entidad, así como la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda y la Junta Nacional de Invalidez.

**ANTECEDENTES**

**1.** Narró el accionante que el 21 de julio de 2021 solicitó a Colpensiones calificar su pérdida de la capacidad laboral y luego de allegada la información médica adicional, que le requirió esa entidad en tres diferentes ocasiones, siendo la última fecha de radicación de historia clínica actualizada el 01 de diciembre de 2021, el 20 de ese mismo mes se llevó a cabo la valoración médica laboral. Sin embargo a la fecha aún no le han notificado el dictamen correspondiente.

Pretende se protejan sus derechos de petición, debido proceso, igualdad y seguridad social, y en consecuencia, solicita se ordene a la demandada surtir los trámites necesarios para notificarlo del aludido dictamen de pérdida de capacidad laboral[[1]](#footnote-2).

**2. Trámite:** Por auto del 02 de febrero de esta anualidad el juzgado de primera instancia admitió la acción constitucional.

Solamente se pronunció Colpensiones. Alegó que dentro del trámite médico laboral iniciado por el actor, esa entidad se vio en la necesidad de requerirlo, en diferentes oportunidades, para que allegara soportes médicos adicionales, esto con el fin de valorar de manera integral sus patologías. Para cumplir con lo anterior, el 01 de diciembre de 2021 el afiliado presentó una documentación, la cual se encuentra en estudio por parte de esa administradora de pensiones. Es menester que el demandante surta los trámites administrativos de rigor y no acudir de forma directa a la tutela para satisfacer sus pretensiones, las cuales, por iguales razones, no hacen parte de la órbita decisoria del juez constitucional. Agregó que todos los jueces, incluidos los de tutela, están obligados a defender el patrimonio público[[2]](#footnote-3).

**3. Sentencia impugnada:** En providencia del 15 de febrero último, el juzgado de primera instancia concedió el amparo invocado y ordenó a la Directora de Medicina Laboral, la Directora de Acciones Constitucionales, el Gerente de Determinación de Derechos y la Vicepresidencia de Operaciones del Régimen de Prima Media de Colpensiones emitir acto administrativo “mediante el cual pongan en conocimiento del accionante el dictamen de pérdida de capacidad laboral que le fue realizado el día 20 de diciembre de 2021”.

Lo anterior tras considerar que “el dictamen de pérdida de capacidad laboral le fue realizado desde el día 20 de diciembre de 2021 y que a la fecha no se ha procedido con su emisión y notificación”, es decir que han transcurrido más de tres meses desde la realización de la valoración, sin que la entidad accionada le notifique de sus resultas al actor, lo que desconoce el derecho que le asiste al afiliado de conocer el porcentaje, la fecha de estructuración y el origen de sus patologías, con miras a acceder a una eventual pensión de invalidez

De otro lado, ordenó la desvinculación de las demás autoridades convocadas, al no haber dado lugar a la lesión de derechos fundamentales[[3]](#footnote-4).

**4. Impugnación:** Al impugnar el fallo, la parte demandada argumentó que si bien se evidencia que el afiliado inició nuevamente el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral el 04 de febrero de 2022, de la verificación de los documentos que aportó, se vio la necesidad de solicitarle unos adicionales, a efecto de valorarlo de manera integral. Fue así como el 14 de febrero de 2022 se le envió tal requerimiento con la advertencia de que debía allegar tales soportes en el término de un mes, ello de conformidad con las facultades que le son legalmente conferidas para casos de peticiones incompletas, sin embargo, hasta el momento el actor no ha cumplido tal carga y por ello no es posible imputarle lesión alguna a esa entidad. También reiteró que la acción de amparo no es el medio para ventilar el debate aquí propuesto[[4]](#footnote-5).

**CONSIDERACIONES**

**1.** El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable (art. 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991).

**2.** En el caso concreto la queja constitucional se planteó contra Colpensiones al demorar el trámite de la calificación de pérdida de la capacidad laboral en primera oportunidad, ya que a pesar de haberse allegado la información médica requerida por esa entidad, no ha surtido la notificación del dictamen correspondiente. Frente a esa situación, el juzgado accionado consideró que la demandada lesionó garantías fundamentales, pues, en efecto, incurrió en tardanza en aquel procedimiento.

La recurrente alegó que hasta que el actor no allegue los nuevos soportes que le fueron requeridos, a efecto de poder realizar una calificación integral de sus patologías, no es posible continuar el trámite médico laboral. Además, insiste en que la acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito de la subsidiariedad.

De conformidad con lo anterior, el problema jurídico consiste en determinar si resulta procedente la acción de amparo para dirimir la controversia planteada y, en caso positivo, si Colpensiones lesionó los derechos fundamentales del demandante en aquel trámite.

**3.** El señor Jairo Cifuentes Valencia está legitimado en la causa por activa, al ser la persona que promovió el citado procedimiento de calificación de invalidez como afiliado al sistema de seguridad social a través de Colpensiones. También está legitimada por pasiva aquella entidad, por intermedio de su Directora de Medicina Laboral (numeral 4.3.2.2 del artículo 4º del Acuerdo 131 del 2018 expedido por la Junta Directiva de Colpensiones), como autoridad competente de atender el caso. En esta sede, se advirtió a la citada funcionaria sobre la existencia de la causal de nulidad generada por su falta de vinculación al trámite, sin embargo, como ningún pronunciamiento emitió, esa irregularidad se entiende saneada.

Distinto ocurre con los demás funcionarios que de la demandada fueron vinculados, así como con la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda y la Junta Nacional de Invalidez, porque en realidad si existiere alguna lesión de derechos esas autoridades no son responsables de la misma.

**4.** En punto del análisis de los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela, se advierte, de cara al presupuesto de inmediatez, que si bien al trámite de calificación de pérdida de la capacidad laboral se dio inicio desde 09 de julio de 2021, para la fecha en que se presentó la acción de tutela no se había emitido el respectivo el dictamen médico laboral. Adicionalmente, el último requerimiento que se había hecho hasta ese momento, a efecto de actualizar la historia clínica del actor, se remonta al 24 de noviembre de 2021 y de esa época a la fecha de presentación del libelo (01 de febrero de 2022, arch. 2 p. i.) transcurrieron menos de tres meses, lo que enseña que se acudió en forma perentoria a la solicitud de amparo.

Respecto a la subsidiariedad es menester precisar de entrada que el actor no controvierte el resultado de la pérdida de capacidad laboral (PCL), que para la fecha de inicio del trámite aún no se le había determinado, ni reclama se le reconozca una pensión de invalidez, sobre la cual apenas le asiste alguna expectativa. Lo que en realidad controvierte es una determinación de Colpensiones que impone una barrera de acceso a la calificación de la PCL, al dilatar o demorar su práctica sin razón que lo justifique.

En esas condiciones, considera esta instancia que resulta desproporcionado obligar al accionante a acudir a un proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social para reclamar simplemente su derecho a la práctica y notificación del dictamen de primera oportunidad a cargo del fondo de pensiones sin dilaciones de ninguna clase, como lo ha sostenido la jurisprudencia[[5]](#footnote-6), y luego, si es el caso, iniciar otro proceso ordinario contra la calificación que se le otorgue, o para definir si le asiste derecho a ser beneficiario de una pensión de invalidez, todo lo cual implicaría un retardo injustificado frente a una persona que precisamente solicita la calificación por considerar que su estado de salud le genera una condición de invalidez.

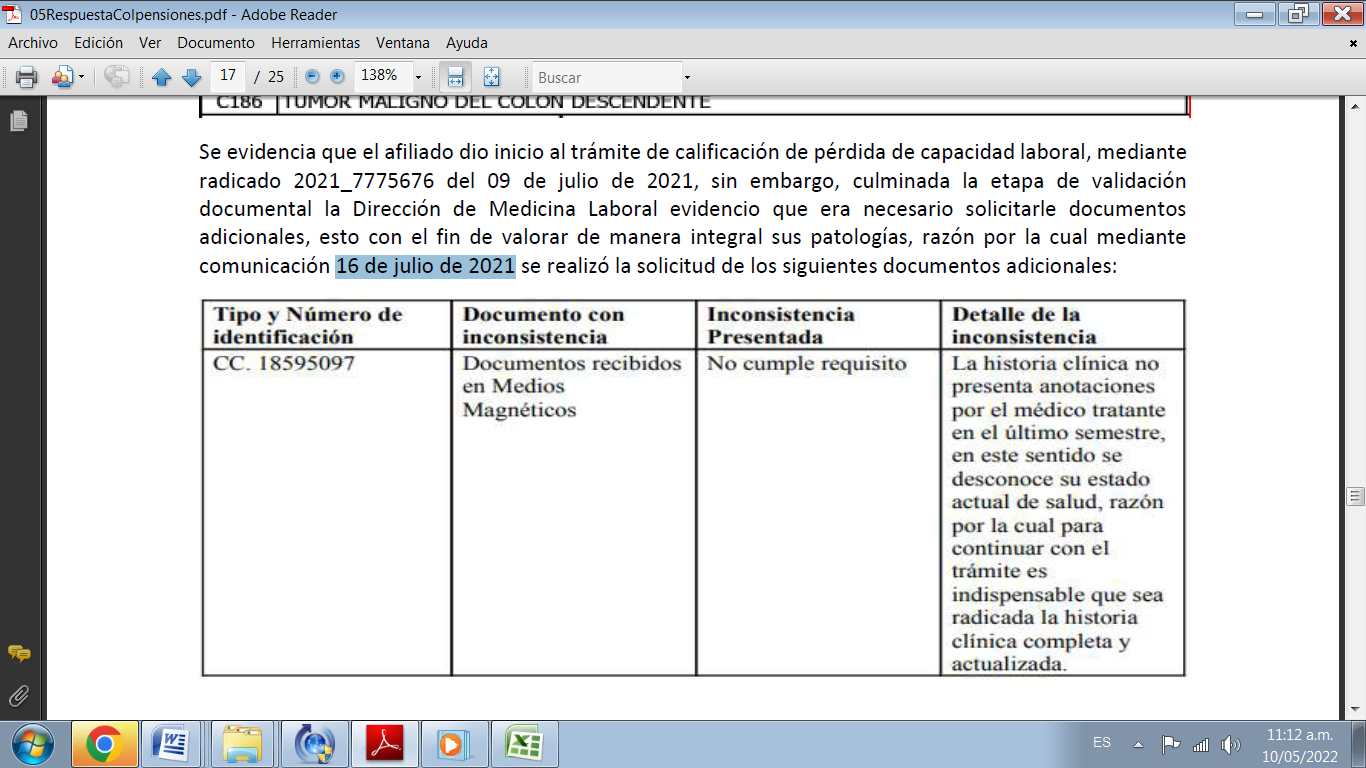
No sobra destacar que, en casos similares al presente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido (i) la importancia del derecho a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral como un medio para garantizar los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital, toda vez que tal evaluación permite determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento pensional que asegure su sustento económico, dado el deterioro de su estado de su salud y, por tanto, de su capacidad para realizar una actividad laboral que le permita acceder a un sustento (CC, sentencia T-038 de 2011); y que (ii) si bien existe un mecanismo de defensa ordinario a cargo de la jurisdicción laboral y de la seguridad social, según la regla de competencia definida por el artículo 2° del Estatuto Procesal del Trabajo, al cual podría acudirse para controvertir la demora o dilación en la práctica de la calificación, el mismo luce ineficaz al no ser lo suficientemente expedito frente a situaciones particulares de ciudadanos que, al no contar con otros medios económicos, estar discapacitados (sentencia T-646 de 2013), ser sujetos de especial protección por su extrema vulnerabilidad o ser víctimas del conflicto armado (sentencias T-067 de 2019 y T-343 de 2020), demandan una protección inmediata.

En suma, considera la Colegiatura que, en aplicación de esos precedentes, la tutela resulta procedente pues se hace necesario adoptar las medidas urgentes para que se defina la situación médico laboral del actor, al menos en cuanto se refiere a la calificación de invalidez, lo que permitirá determinar si tiene derecho o no de acceder a la pensión de invalidez. De manera que desproporcionado luciría someter a una persona en sus circunstancias[[6]](#footnote-7), a un proceso ordinario laboral, que por lo general implica la inversión de extensos términos, solo para que se decida si le asiste o no el derecho a obtener dicha valoración en forma oportuna.

Lo anterior, además, sigue la línea de pensamiento que ha fijado esta Sala sobre la procedencia del amparo en casos análogos[[7]](#footnote-8).

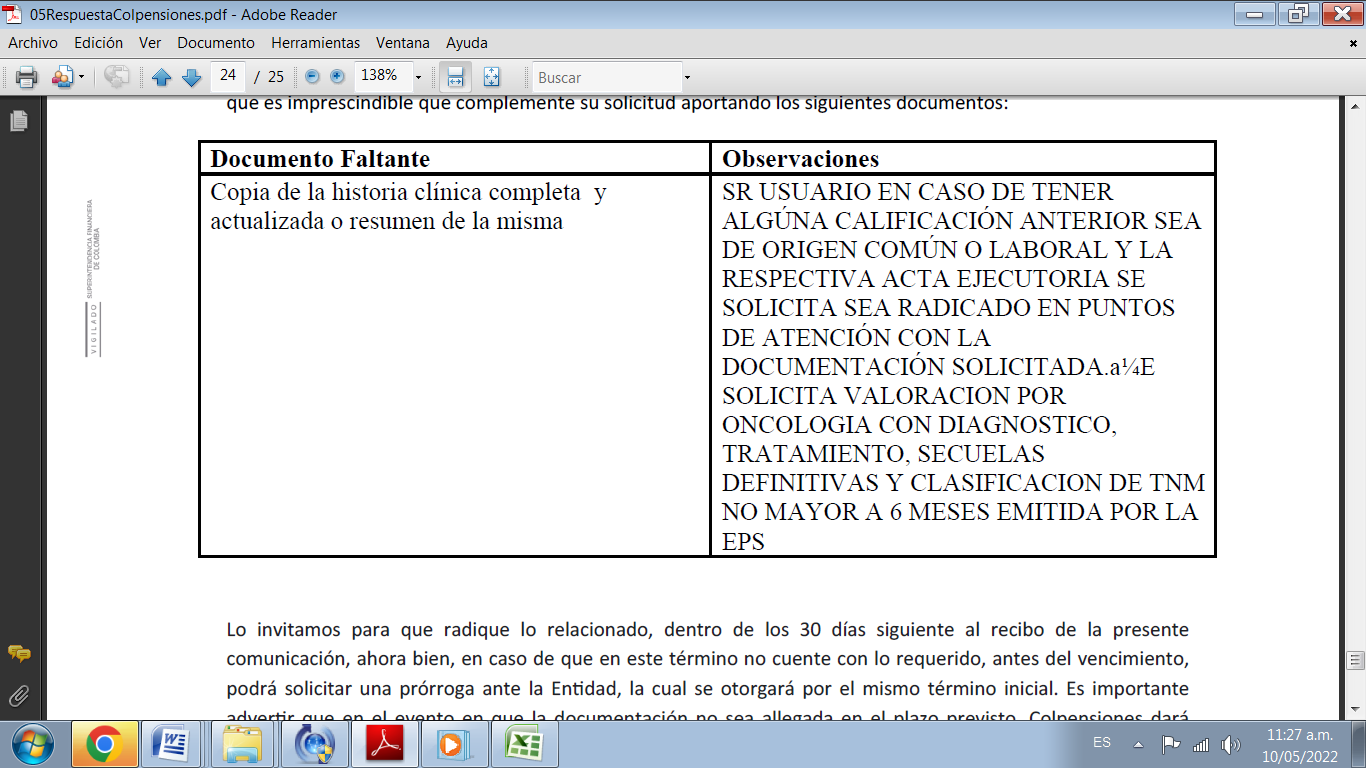
**5.** Satisfechos tales presupuestos, la Colegiatura se encuentra avalada para definir el fondo del asunto. Con ese norte, la revisión de las pruebas arrimadas permite tener por acreditados los siguientes hechos:

**5.1.** Con ocasión a la solicitud que para obtener se calificara la pérdida de la capacidad laboral del accionante se elevó el 09 de julio de 2021[[8]](#footnote-9), Colpensiones, el 16 de ese mismo mes, emitió comunicado por medio del cual lo requirió para que allegara la siguiente información, so pena de declarar el desistimiento tácito de la actuación:



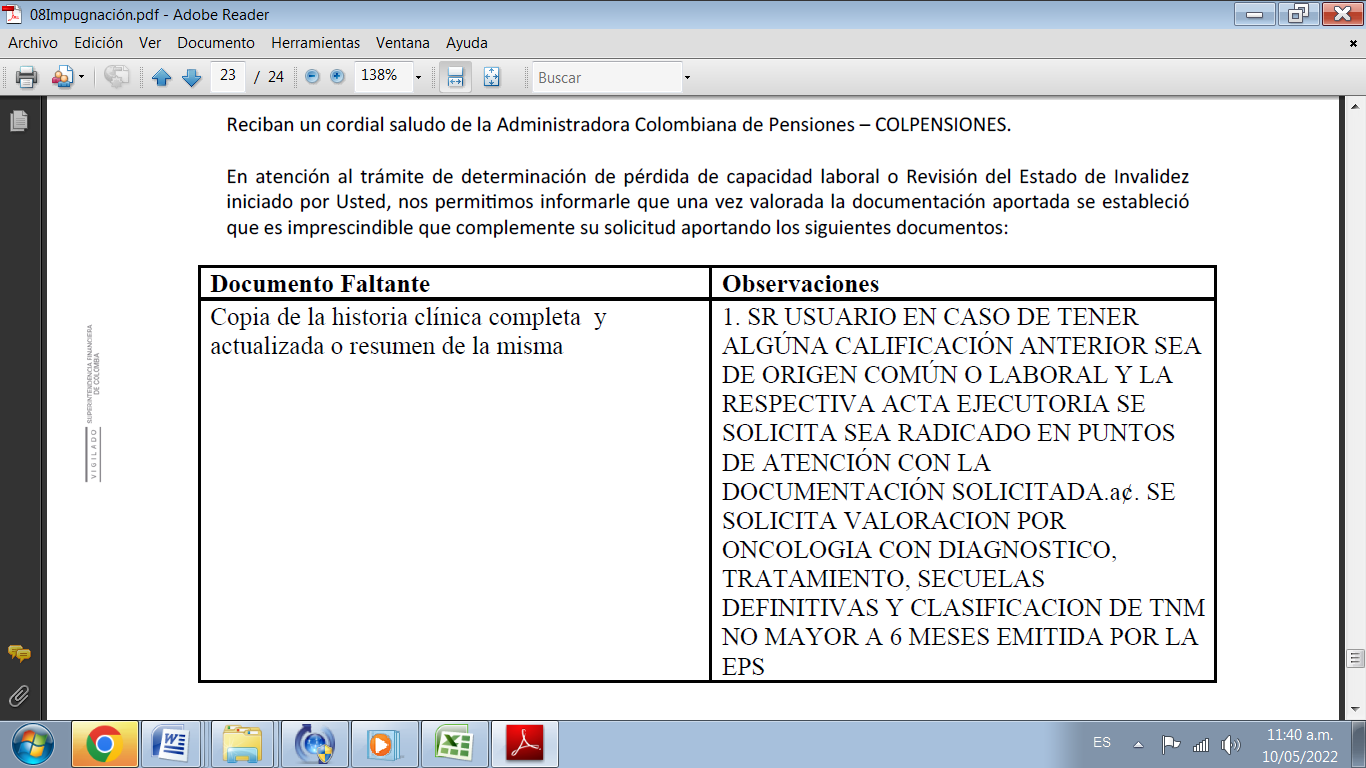
Sin embargo, como el oficio respectivo fue remitido a dirección errada[[9]](#footnote-10), el 15 de octubre de 2021, Colpensiones reiteró tal solicitud[[10]](#footnote-11).

**5.2.** El 24 de noviembre de 2021[[11]](#footnote-12), la demandada hizo un nuevo requerimiento esta vez para que el afiliado aportara:



**5.3.** Según los hechos de la demanda, para cumplir esa exigencia se radicó una nueva historia clínica ante Colpensiones el 01 de diciembre de 2021. El hecho no se controvirtió, se admitió en forma expresa por la accionada. Además, con la demanda se aportó un sello de recibido de esa fecha, el cual consta a folio 07 del archivo 01 del cuaderno de primera instancia.

**5.4.** En comunicación del 14 de febrero de este año[[12]](#footnote-13), la entidad accionada le insistió al afiliado sobre la necesidad de presentar aquella información, de esta manera:



**5.5.** Tales documentos fueron aportados por el demandante el 22 de marzo pasado, según lo indicó la propia accionada en oficio del 08 de abril siguiente[[13]](#footnote-14).

**5.6.** Ya con posterioridad a la sentencia de primera instancia, y en cumplimiento de lo allí ordenado, el 07 de abril de este año Colpensiones emitió dictamen en el que calificó, en primera oportunidad, la pérdida de la capacidad laboral del actor[[14]](#footnote-15).

**5.7.** Para notificar esa determinación se remitió oficio mediante correo a la dirección electrónica [martalinaquinteroacosta@gmail.com](mailto:martalinaquinteroacosta@gmail.com)[[15]](#footnote-16), que no coincide con la reportada en la solicitud ([confianzalegal2012@gmail.com](mailto:confianzalegal2012@gmail.com)) ni en el escrito de tutela. Tampoco se dirigió la comunicación al apoderado del actor dentro de ese trámite. Si bien obra constancia de remisión por correo físico a la dirección del apoderado judicial dentro de ese trámite, y prueba de su entrega según consta en el archivo 35 de esta instancia, que ocurrió el 21 de abril pasado, entiende la Sala que corresponde al oficio dirigido a ese profesional, de fecha 19 de abril de 2022[[16]](#footnote-17), que no corresponde a la notificación del dictamen pues allí solo se indica sobre el punto que mediante dictamen número DML-4559832 del 07 de abril de 2022, se determinó la pérdida de la capacidad laboral y la fecha de estructuración, así como los demás aspectos propios del proceso de calificación, dictamen que se encuentra en proceso de notificación.

En suma, no se demostró la adecuada notificación del dictamen ni al interesado ni a su apoderado entro de ese trámite.

**6.** A la primera conclusión que se arriba del análisis de ese acervo probatorio, es que en este caso el dictamen médico laboral no tuvo lugar el 20 de diciembre de 2021, tal como erradamente lo consideró el juzgado de primer nivel, sino el 07 de abril último, en cumplimiento de la orden de tutela de primer grado. Por ello la controversia no podría girar en torno únicamente a la falta de notificación de ese dictamen sino también a su efectivo pronunciamiento.

**7.** De aquellas pruebas también surge evidente que el trámite de calificación médico laboral iniciado por el actor tuvo una duración de más de nueve meses y que esa inusitada demora, fue provocada, en gran parte, por los sucesivos requerimientos realizado por Colpensiones para que allegara la historia clínica actualizada, una de cuyas exigencias fue indebidamente comunicada, y cierres o archivo por entender desistida la petición.

La anterior situación lleva a recordar que la determinación de la pérdida de capacidad laboral tiene un trámite regulado, que involucra la acción coordinada tanto del afiliado como de diferentes instituciones que integran ese sistema (Sentencia T-044 de 2018). Así, quien actúa como calificador (para el caso Colpensiones) tiene la posibilidad de solicitar en forma directa a la EPS o los médicos tratantes, así como también puede hacer uso de sus facultades para surtir las gestiones del caso en aras de obtener las valoraciones o exámenes clínicos necesarios para determinar integralmente el estado médico laboral del afiliado.[[17]](#footnote-18)

*“En consecuencia, el médico laboral-calificador al momento de realizar la evaluación general deberá contar con la información que determine el diagnóstico y estado clínico del solicitante, ya que el informe rendido por esté es pieza fundamental para la posterior decisión que expida la Junta de Calificación de Invalidez y si dicho profesional no cuenta con la información suficiente y pertinente para determinar en forma más precisa la magnitud y el compromiso de la patología presentada por el aspirante está plenamente facultado para ordenar a la EPS con la cual el solicitante tenga su contrato de afiliación, que suministre todo el material médico, que en el últimas dará certeza sobre el daño corporal y su posible incidencia en la disminución de la capacidad laboral. (…) De cualquier modo, en el evento que la información enviada no sea suficiente para determinar un diagnóstico definitivo de la patología padecida puede el calificador en esta fase primaria requerir a la EPS o IPS que por conducto del médico tratante o interconsultor se realicen las pruebas, exámenes y procedimientos necesarios con el propósito de emitir un informe exacto.”* (CC, sentencia T-854 de 2010).

Es que, así como las Juntas de Calificación de Invalidez cuentan dentro de sus funciones con la posibilidad de, si lo consideran necesario y con el fin de proferir el dictamen, solicitar los antecedentes e informes adicionales a las Entidades Promotoras de Salud, a las Administradoras de Riesgos Laborales, a las Administradoras del Sistema General de Pensiones, Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y demás Compañías de Seguros así como a los empleadores y a las instituciones prestadoras de servicios de salud que hayan atendido al afiliado, al pensionado o al beneficiario (Art. 10-10 Decreto 1352 de 2013), o de ordenar la práctica de exámenes y evaluaciones complementarias, diferentes a los acompañados en el expediente que considere indispensables para fundamentar el dictamen (Art. 10-9 ibidem), similar ejercicio debe realizar el primer calificador a fin de obtener una calificación integral e informada, y evitar imponer a los afiliados cargas administrativas que en ocasiones superan sus posibilidades, como cuando les exigen valoraciones especializadas para ser aportadas en espacios cortos de tiempo, so pena de entender desistida la solicitud.

Innegable entonces la importancia que en ese trámite corresponde a la Entidad Promotora de Salud quien, también como integrante del sistema integral de seguridad social, debe colaborar con el calificador, en este caso el fondo de pensiones, a fin de lograr una pronta conclusión del procedimiento de calificación de la PCL. “*En síntesis, las entidades encargadas de prestar el servicio de salud a la comunidad, no pueden negarse a realizar procedimientos y actividades de diagnóstico (como un examen o un cita con un especialista)[[18]](#footnote-19), aduciendo argumentos de tipo administrativo, económico etc. y en manifiesta contradicción de la normatividad legal, cuando sea necesario para agilizar el trámite de la pensión de invalidez, pues esto vulnera los derechos a la salud, a la vida y a la dignidad humana de quien necesita la claridad del diagnóstico para acceder al derecho fundamental de la seguridad social.”* (ib)

Aplicado este precedente al asunto bajo estudio, se infiere que efectivamente Colpensiones no podía condicionar el trámite de calificación de invalidez a la actualización de la información médica del accionante, o a la realización de nuevas valoraciones médicas a realizar por su cuenta en forma exclusiva, menos bajo el apremio de entender desistida su petición, pues esa no es carga que se pueda imponer en forma única al afiliado, ante la claridad de que en eventos de insuficiencia de la información clínica, la entidad calificante también está encargada de adelantar los trámites pertinentes ante la EPS a que se encuentre afiliado el usuario, a efecto de suplir esa falencia.

En este punto es válido señalar que aunque no solo la actualización de aquella información médica fue el motivo por el cual Colpensiones difirió la definición del trámite tantas veces indicado, pues, además, en los dos últimos requerimientos (24 de noviembre de 2021 y 14 de febrero de este año) también se solicitó al actor indicar si ya había sido objeto de otra calificación de invalidez y en caso positivo allegarla junto con la constancia de ejecutoria, de todas formas, y al margen de que se estime adecuado o no tal requerimiento, considera la Sala que a esas alturas no era posible poner de manifiesto un requisito adicional que no había sido advertido desde el inicio de la actuación, sino cuando ya habían transcurrido, al menos, cuatro meses desde que el actor pidió se calificara su estado de invalidez, por lo que aquel requerimiento se erige como otro obstáculo injustificado, o por lo menos inoportuno, al trámite médico laboral. Además, la accionada contaba también con herramientas para, de existir esa anterior calificación, obtenerla por sus propios medios y hacerla llegar al expediente administrativo.

**7.** Dilucidado lo anterior, la Sala procede a analizar si en este asunto, por las pruebas incorporadas en esta sede, se puede considerar la configuración de una carencia actual por hecho superado.

En esa labor se recuerda que para la declaración del hecho superado se requiere, entre otros supuestos, que se haya satisfecho efectivamente y por completo lo pretendido.

Al realizar tal examen en el caso concreto, se evidencia que si el fin que persigue el actor es obtener se produzca y se notifique el dictamen en que se califique su pérdida de la capacidad laboral, las pruebas allegadas en esta sede solo demuestran la satisfacción de lo primero. Nótese que a pesar de que se emitió dicho dictamen, para su notificación se utilizó el correo electrónico martalinaquinteroacosta@gmail.com[[19]](#footnote-20), a pesar de que el demandante autorizó expresamente el de [confianzalegal2021@gmail.com](mailto:confianzalegal2021@gmail.com) ante esa entidad para efecto de notificaciones[[20]](#footnote-21), misma dirección que se registra en la solicitud de inicio del procedimiento médico laboral[[21]](#footnote-22) y hasta en la acción de tutela, por lo que no es entendible el motivo por el cual se remitió la calificación de invalidez a aquel correo electrónico.

Bajo las anteriores premisas, y al no estar acreditada en debida la notificación del mencionado dictamen, no es posible declarar la existencia de un hecho superado.

**8.** En estas condiciones, tal como se anticipó, la lesión a los derechos fundamentales del accionante tuvo lugar porque Colpensiones no podía imponerle la carga de actualizar su historia clínica, antes por el contrario, debió honrar el principio de coordinación propio del Sistema Integral de Seguridad Social, para obtener la información respectiva de la empresa promotora de salud correspondiente. De igual manera, porque exigió el aporte de información sobre anteriores calificaciones de invalidez, luego de mucho tiempo después de iniciado el trámite. Por tanto, con esas dos actuaciones incurrió en demora injustificada del trámite.

Por todo lo anterior, se confirmará la decisión impugnada. Sin embargo, la Sala se ve precisada a ajustar las decisiones allí adoptadas en estos términos: aunque lo procedente en estos casos, sería ordenar al fondo de pensiones requerir a la EPS a que se encontrara afiliado el demandante para que brindara la información médica faltante y luego proferir el dictamen médico laboral, lo cierto es que a estas alturas se conoce que a todo ello ya se procedió, pues el mismo actor aportó tales datos y Colpensiones emitió esa calificación de pérdida de capacidad laboral, y lo que resta por materializar es su adecuada notificación al demandante y por ello la orden emitida en primera instancia para que se perfeccionara ese enteramiento se confirmará, pero con las aclaraciones de que quien debe cumplir ese mandato es la Directora de Medicina Laboral de esa entidad, tal como se señaló en el punto tres de esta parte considerativa y que el dictamen que se debe notificar no data del 20 de diciembre de 2021 sino del 07 de abril de este año.

Finalmente, se adicionará para declarar improcedente el amparo frente a los demás funcionarios que de Colpensiones fueron vinculados, así como frente a la Junta Regional de Invalidez de Risaralda y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE**

**PRIMERO: Modificar** los ordinales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha y procedencia anotadas, en el sentido de ordenar a la Directora de Medicina Laboral de Colpensiones que, en el término de 48 horas contadas desde la notificación que de esta providencia se le realice, notifique al actor del dictamen médico laboral emitido el 07 de abril de 2022, por intermedio del correo electrónico registrado por el citado señor para ese efecto.

Además para declarar improcedente el amparo frente a la Directora de Prestaciones Económicas, la Directora de Acciones Constitucionales, el Director de Procesos Judiciales, el Gerente de Determinación de Derechos, el Gerente de Defensa Judicial, el Vicepresidente de Operaciones del Régimen de Prima Media y la Subdirectora de Determinación de Derechos de Colpensiones, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda y la Junta Nacional de Invalidez.

En lo demás, se confirma la sentencia impugnada.

**SEGUNDO:** Notificar a las partes lo aquí resuelto en la forma más expedita y eficaz posible. Comuníquese de igual forma al Juzgado de primera instancia.

**TERCERO:** Enviar oportunamente, el presente expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

**CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS**

**ÁNGEL FRANCISCO GALVIS LUGO**

Conjuez

**HÉCTOR JAIME GIRALDO DUQUE**

Conjuez

1. Documento 01 del cuaderno de primera instancia. [↑](#footnote-ref-2)
2. Documento 05 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-3)
3. Documento 06 del cuaderno de primera instancia. [↑](#footnote-ref-4)
4. Documento 08 del cuaderno de primera instancia. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ver, entre otras sentencias: TSP ST2-0396-2021, y sentencia T-427 del 2018 de la Corte Constitucional. [↑](#footnote-ref-6)
6. Según el dictamen ya elaborado, paciente con antecedentes de cuadro clínico de varios años de cáncer de colon CT4b CN1 CM0, estadio clínico IIIC, sin metástasis le realizan hemicolectomía, lo dejan con colostomía que fue posteriormente cerrada el 10-10-2021, presentó posterior a esto peritonitis y requirió manejo de herida abierta y cierre por segunda intención, no fue posible la reconstrucción de la pared abdominal por abdomen hostil y falta de fascia de pared abdominal; eventración abdominal no operable por el riesgo de peritonitis, no tiene fascia en la pared anterior del abdomen; en tratamiento y manejo por varias especialidades. Archivo 31 segunda instancia. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sentencias de tutela del 16 de diciembre de 2019, expediente No. 66001-31-03-003-2019-00470-01; ST2-0097-2021; ST2-0306-2021; ST2-0328-2021; ST2-0343-2021; ST2-0024-2022. [↑](#footnote-ref-8)
8. Folios 05 y 06 del archivo 01 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-9)
9. Información contenida en la respuesta que obra a folios 15 a 21 del archivo 05 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-10)
10. Folios 22 y 23 del archivo 05 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-11)
11. Folios 24 y 25 del archivo 05 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-12)
12. Folios 24 y 25 del archivo 08 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-13)
13. Archivo 27 del cuaderno de segunda instancia [↑](#footnote-ref-14)
14. Archivo 31 del cuaderno de segunda instancia [↑](#footnote-ref-15)
15. Archivo 30, 31 y 32 del cuaderno de segunda instancia [↑](#footnote-ref-16)
16. Archivo 28 segunda instancia. [↑](#footnote-ref-17)
17. TSP. ST2-0325-2021. [↑](#footnote-ref-18)
18. Corte Constitucional, sentencia T-1182 del dos de diciembre de 2008. [↑](#footnote-ref-19)
19. Archivo 31 del cuaderno de segunda instancia [↑](#footnote-ref-20)
20. Folio 07 a 10 del archivo 01 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-21)
21. Folios 05 y 06 del archivo 01 del cuaderno de primera instancia [↑](#footnote-ref-22)